

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.
Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero. Colón, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey Don Alfonso y la Reina Doña María de las Mercedes se encuentran en esta Corte sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan la Serma. Señora Princesa de Asturias, y las Sermas. Sras. Infantas Doña María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.

(Gaceta núm. 103.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REALES ÓRDENES.

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de ese alto Cuerpo ha emitido con fecha 7 de Febrero último el informe siguiente:

«Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso ha visto la demanda deducida en 30 de Setiembre de 1877 por el Dr. D. Manuel Danvila, a nombre y con poder del Ayuntamiento de Onteniente, contra la Real orden de 16 de Mayo anterior, expedida por ese Ministerio, mandando que se manifestase al Gobernador de la provincia de Valencia que procedía desestimar la solicitud de la Corporación demandante, relativa a que se le citase para la práctica de cierta operación de deslinde.

De sus antecedentes aparece: Que al disponerse el Ingeniero Jefe del distrito de Valencia a practicar el deslinde de los montes que el Estado posee en Onteniente, el Ayuntamiento de dicho pueblo solicitó del Gobernador en 9 de Octubre de 1876 el ser citado para aquella operación, fundándose en el interés que en la misma tenía, atendidos los derechos del Común de vecinos al disfrute de los referidos montes.

Que aquel funcionario, informando sobre la anterior solicitud, propuso que se desestimase por no estar apoyada en nin-

gun precepto legal, habiendo el Gobernador acordado en 15 de Diciembre del mencionado año 1876 acceder a la pretension del Ayuntamiento, sin que por ello se entendiera prejuzgado derecho alguno.

Que en su vista el Ingeniero elevó la oportuna consulta a ese Ministerio a fin de que se dictase una resolución que estableciese jurisprudencia para estos casos; y oída la Junta superior consultiva y la Sección de Fomento de este Consejo, se expidió, de conformidad con los dictámenes por los mismos emitidos, la Real orden de 16 de Mayo de 1877, por la que se dispone que «se manifieste al Gobernador de la provincia de Valencia que procede desestimar la pretension del Ayuntamiento de Onteniente, que pide se le cite para la práctica de las operaciones de deslinde de los montes de dicho término; sin perjuicio del derecho que para reclamar contra dichas operaciones concede el art. 34 del reglamento.»

Que en 20 de Setiembre siguiente el Doctor D. Manuel Danvila, en la representación indicada, presentó demanda contra la anterior Real orden, pidiendo su revocación y que se confirmase en todas sus partes el mencionado acuerdo del Gobernador de Valencia, que quedó sin efecto por dicha Real orden.

Y que el Fiscal de S. M., a quien se pasaron todos los antecedentes, pidió en escrito de fecha 5 de Diciembre último que se consultara la inadmisión de la presente demanda:

Visto el art. 56 de la ley de 17 de Agosto de 1869, según el cual el que se sintiere agraviado por alguna resolución del Gobierno o de las Direcciones generales que cause estado, podrá reclamar contra ella en vía contenciosa, proponiendo su demanda ante el Consejo:

Visto el art. 36 del reglamento de Montes de 17 de Mayo de 1865, que dice: «Las cuestiones a que dé origen el deslinde y amojonamiento de los montes pertenecientes al Estado, a los pueblos o a los establecimientos públicos, cuando pasen a ser contenciosas serán de la competencia de los Consejos provinciales, reservando las demás cuestio-

nes de derecho civil a los Tribunales competentes.»

Considerando que la Real orden impugnada no puede reputarse que haya causado estado, porque se limita resolviendo la consulta que elevó a ese Ministerio el Ingeniero Jefe de la provincia, a fijar la inteligencia que debe darse al reglamento de Montes y a determinar la resolución que en su consecuencia había de dictar el Gobernador; y que por lo mismo, para determinar la procedencia de la vía contenciosa en el presente caso, falta uno de los requisitos que exige el art. 56 de la ley de 17 de Agosto de 1869:

Y considerando que en el caso de que el Gobernador de la provincia dictase providencia con carácter definitivo sobre la reclamación del Ayuntamiento demandante, con arreglo al texto expreso del art. 34 del citado reglamento, podría intentarse la vía contenciosa contra la indicada providencia ante la Comisión provincial, la cual declararía en su caso si procedía o no la admisión del recurso;

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal de S. M., entiende que no debe admitirse la demanda de que deja hecho mérito.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, ha tenido a bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento, el de la Sala y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de Abril de 1878.—C. el Conde de Toreno—Sr. Presidente del Consejo de Estado.

Remitido a informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por los Maestros de las Escuelas públicas de Juslibol contra el acuerdo de esa Comisión provincial que aprobó el del Ayuntamiento de dicho pueblo, por el que suprimió la Escuela de niñas y redujo a incompleta la de niños que existen en el mismo, la Sección de Fomento de aquel alto Cuerpo la ha evacuado en los términos siguientes:

«Excmo. Sr.: De Real orden

comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 27 del mes anterior, se remitió a informe de esta Sección el recurso de alzada interpuesto por los Maestros de primera enseñanza de Juslibol contra el acuerdo de la Comisión provincial de Zaragoza suprimiendo la Escuela de niñas y reduciendo a incompleta la de niños que existen en dicho pueblo.

Resulta que en 14 de Diciembre de 1874 el Alcalde y Ayuntamiento de Juslibol acudieron a la Diputación provincial en solicitud de que aprobara el acuerdo tomado por el Municipio de suprimir la Escuela de niñas y de reducir a incompleta la de niños, como medida de economía para desahogar de atenciones el presupuesto municipal; y alegando que según el censo formado últimamente no existían en la localidad más que 422 almas, ó sean 95 vecinos y 17 domiciliados, número menor del de 509 almas que prefija el artículo 100 de la ley de Instrucción pública para el sostenimiento de las Escuelas de ambos sexos y para que la de niños obtenga la categoría de Escuela completa.

La Diputación aprobó el acuerdo del Ayuntamiento, y en su virtud los Maestros de primera enseñanza de Juslibol acudieron en alzada ante ese Ministerio, manifestando que habían obtenido sus respectivas Escuelas en concurso de traslación, y que se les privaba de emolumentos que tenían derecho a percibir; que en el censo de 1860 figuraba Juslibol con 522 almas; y le correspondía por ello mantener las dos Escuelas; debiendo, en caso de que la economía procediera, esperar a que resultasen vacantes las Escuelas:

Con Real orden de 4 de Agosto de 1876 se remitió a informe de esta Sección el expediente de que se trata, uniéndose copia de lo resuelto por la Dirección general de Instrucción pública en 2 de Diciembre de 1875, encargándose a la Sección en la citada Real orden que tuviera en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.º del decreto de 12 de Julio de 1874.

La resolución de 2 de Diciembre declara que el número de habitantes con que cada pueblo figura en el censo de 1860 es el

que ha de servir para saber el número de las Escuelas públicas que los Ayuntamientos deben sostener, y para fijar la dotación de los profesores; y el párrafo segundo del art. 9.º del decreto de 12 de Junio de 1874, restableciendo el Consejo de Instrucción pública, previene en su última parte que las Escuelas de primera educación podrán crearse, más no suprimirse, sin la audiencia del mismo Consejo.

Como este trámite no se había llenado, y era indispensable para que pudieran ser ejecutivos los acuerdos del Ayuntamiento y el de la Diputación, fue de dictamen la Sección, según su informe de 22 de Setiembre de 1876, que con suspensión de los efectos del acuerdo reclamado, se remitiera aquel al Consejo de Instrucción pública; y estimado así, la Sección quinta de dicha dependencia, teniendo en cuenta que hay motivos para desconfiar de la exactitud de los padrones que forman los pueblos, y lo mismo de sus amillamientos, por haber en todos ellos la tendencia de ocultar la riqueza, y rebajar el censo de población para tributar menos; que por otra parte, aun cuando fuese exacto que el pueblo de Juslibol, situado en la rica y amena vega de Zaragoza, al cual no han alcanzado en particular los desastres de la guerra civil, hubiera perdido en estos tres últimos lustros la cuarta parte de su vecindario, no es lícito atenerse al empadronamiento mientras el tipo legal regulador para la creación y disminución de Escuelas sea el censo oficial de 1860, fue de parecer que no procedía conceder la disminución que en las Escuelas de Juslibol proponía su Ayuntamiento.

La Dirección general del ramo, de conformidad con la nota del Negociado, considerando de que la resolución aludida venía a modificar un acuerdo de la Comisión provincial de Zaragoza opinó que antes de resolver definitivamente este expediente debía remitirse al Consejo de Estado; lo que así se acordó por Real orden de 27 del mes anterior.

Cumpliendo la Sección su cometido, manifestó a V. E. que siendo el principal fundamento de los acuerdos del Ayuntamiento y de la Diputación provincial para suprimir la Escuela de niñas y reducir a incompleta la de niños el exiguo número de vecinos que resulta del padron formado últimamente por dicha Municipalidad, y teniendo en cuenta que la Dirección general de Instrucción pública en 2 de Diciembre de 1875, es decir, con posterioridad a la formación del censo de población verificado por dicho Ayuntamiento, ha resuelto que el número de habitantes con que cada pueblo figura en el censo de 1860 es el que ha de servir para saber el número de Escuelas públicas que los Ayuntamientos deben sostener, y para fijar la dotación de los Profesores; que el art. 2.º del Real decreto de 12 de Junio de 1863 dispone asimismo que el censo oficial de 1860 rija como obligatorio para todos los actos del Gobierno y

de la Administración pública, y por último, que el pueblo de Juslibol figuraba en el censo de población de 1860 con 522 almas.

La Sección, de acuerdo con el Consejo de Instrucción pública y la Dirección general del ramo, es de dictamen que no procede estimar la disminución de Juslibol que propone el Ayuntamiento.

Y confirmando S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha dignado resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 6 de Abril de 1878.—C. Toreno.—Sr. Gobernador de la provincia de Zaragoza.

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y a quienes toca su observancia y cumplimiento; sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que en primera y única instancia pende ante el Consejo de Estado, entre partes, de la una D. Anselmo Zaldo, y en su nombre el Licenciado don Manuel Pedregal, demandante, y de la otra la Administración general del Estado, representada por mi Fiscal, demandada, sobre subsistencia ó revocación de la Real orden de 20 de Abril de 1875, expedida por el Ministerio de Hacienda, que desestimó la solicitud del demandante, relativa a que se declarase la nulidad de la venta de ciertas fincas:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del cual resulta:

Que en 22 de Noviembre de 1866 D. Anselmo Zaldo, vecino de Pradoluengo, remató y le fue adjudicado como mejor postor por la Junta superior de Ventas, en 21 de Diciembre siguiente, un lote de 48 fincas rústicas procedentes del beneficio de Santa Olalla del Valle, en la provincia de Burgos, las cuales, según el anuncio para la subasta, medían 26 fanegas con siete celemines y medio, ó sean siete hectáreas 38 áreas.

Que en 19 de Febrero de 1867 satisfizo el comprador el importe del primer plazo de la venta; y sin que aparezca la fecha en que tomó posesión de las fincas de que se trata, acudió al Gobernador de la provincia en instancia de fecha 13 de Marzo del mismo año, manifestando que en el acto de la toma de posesión había notado que no existía la finca señalada en el expediente con el núm. 3, y que por lo mismo debía indemnizarsele del valor de la misma.

Que en 19 de Setiembre de 1868 acudió con nueva instancia a la propia Autoridad, suplicando que se activara el expediente que debió formarse con motivo de su reclamación.

Que, oído el perito práctico D. Francisco Jorgé, informó que

faltaba la finca de que se trata, puesto que D. Anselmo Zaldo compró dos sitas en el término de la Iglesia Vieja, y no existían que una de cuatro celemines de cabida.

Que en vista de estos antecedentes, la Junta provincial de Ventas acordó en 28 de Marzo de 1870, de conformidad con lo propuesto por la Sección de Propiedades y el Oficial Letrado, acceder a la pretensión del recurrente, remitiendo el expediente a la Dirección general del ramo, ante la cual el referido D. Anselmo Zaldo presentó una instancia en 2 de Marzo de 1872, pidiendo que se declarase la nulidad de la subasta, fundándose para ello en existir en el terreno vendido una falta de cabida de más de una cuarta parte de la anunciada.

Que la Junta superior de Ventas, teniendo en cuenta que la falta de cabida no llega a la quinta parte del total del lote, en sesión de 13 de Setiembre de 1873 acordó negarlo solicitado por el demandante.

Que comunicado este acuerdo al interesado, se alzó del mismo para ante el Ministerio de Hacienda, alegando en su instancia de fecha de 30 del mismo mes, que en 26 de Marzo de 1866, é independientemente de la indemnización por no existir la finca señalada con el núm. 3, pidió la nulidad de la venta, apoyado en que los predios rematados tenían mucha menos cabida de la expresada en los anuncios para la subasta, y que la Junta superior de Ventas, al denegar su petición solo había tomado en cuenta la reclamación por la falta de la finca señalada con el núm. 3; y que por Real orden de 20 de Abril de 1875, expedida por el referido Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Dirección general, se desestimó el recurso de alzada interpuesto por D. Anselmo Zaldo, confirmando el acuerdo apelado de la suprimida Junta superior de Ventas.

Vistos los autos contencioso-administrativos, de los cuales aparece:

Que en 16 de Diciembre de dicho año de 1875 el Licenciado D. Manuel Pedregal, a nombre y con poder bastante de D. Anselmo Zaldo, dedujo ante el Consejo de Estado demanda contencioso-administrativa pidiendo la nulidad de la venta de las 48 fincas procedentes del beneficio de Santa Olalla del Valle y la devolución de las cantidades entregadas por su poderdante, dejando en su consecuencia sin efecto la mencionada Real orden de 20 de Abril anterior.

Que a petición del demandante se reclamó y unió a los autos una certificación del Jefe Interventor de la Administración económica de la provincia de Burgos acreditando que en el libro registro que obra en la Comisión provincial de Ventas correspondiente al año de 1867 aparece el asiento siguiente: «Núm. 511.—Pradoluengo.—D. Anselmo Zaldo en 26 de Marzo de 1867 dice que, existiendo gran diferencia de menos entre la cabida del lote de fincas procedente del beneficio de Santa Olalla y la que consta en el expediente,

solicita la nulidad de la venta.»—En 31 al perito D. Sabas Alvarez; y

Que emplazado mi Fiscal, contestó a la demanda pidiendo en escrito de fecha 26 de Junio último que se absolviera de la misma a la Administración general del Estado, confirmando la Real orden impugnada.

Vista la Real orden de 11 de Noviembre de 1863, por la cual se resolvió que en todos los anuncios de subastas que se publiquen desde dicha fecha se exprese que si dentro del término de los dos años siguientes a la adjudicación de la finca al rematante se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, y del expediente resultase que la falta ó exceso iguala a la quinta parte de lo expresado en el anuncio, será nula la venta, quedando firme y subsistente y sin derecho a indemnización el Estado ni el comprador si la falta ó exceso no llegase a aquella quinta parte.

Visto el art. 7.º del Real decreto de 10 de Julio de 1865, según el cual los compradores de bienes nacionales deberán dentro de los 15 días siguientes a la toma de posesión hacer las reclamaciones por desperfectos sufridos en la finca después de la tasación ó por otra causa cualquiera:

Considerando que la reclamación del demandante, origen del expediente gubernativo, tiene como único y exclusivo objeto el que se le indemnice por no existir entre las fincas vendidas la que se consignó en el anuncio de la subasta, como situada en la Iglesia Vieja, de una fanega y medio celemin de cabida:

Considerando que con respecto a la nulidad de la venta, que, prescindiendo de la indemnización se solicita en la demanda, nada se ha resuelto por la Real orden impugnada, la cual se limita a denegar dicha indemnización, ajustándose a lo dispuesto en la Real orden de 11 de Noviembre de 1863, puesto que la falta de cabida no llega a la quinta parte de la anunciada para la subasta.

Y considerando que, aun en el caso de estimarse como cierto y probado que el recurrente solicitó en 26 de Marzo de 1867 ante la Administración económica de la provincia la nulidad de que se trata, como esta reclamación no ha sido examinada ni resuelta por la Administración activa, no puede conocer de ella la jurisdicción contencioso-administrativa, porque para este efecto carece de competencia;

Conformándose con lo consultado por la sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión a que asistieron don Pedro Nolasco Auriolas, Presidente; D. Pedro Sabán, D. Agustín de Torres Valderrama, don José García Barzanallana, don Juan Jimenez Cuenca, D. José María Bremón, D. Juan de Cárdenas, D. Mariano Zacarías Cazorro, D. Estanislao Suárez Inclán, D. Antonio María Fabié, D. Augusto Amblard, el Marqués de Bedmar y D. Antonio de Medina y Zorrilla;

Vengo en absolver a la Administración general del Estado de la demanda deducida a nombre

II
Ayu
no h
la R
últi
cia
dicho
do e
hacer
ta las
que s
caso
1.
llame
que
serva
próxi
enton
mita
metro
menta
cion
de los
rido r
tículo
ro de
2.
de un
remita
diente

Circulares.

En la noche de ayer recibí el siguiente telegrama del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación: «El Sr. D. Bartolomé Molina, Jefe de la Guardia Civil, ha sido nombrado Jefe de la Guardia Civil de la provincia de Orense.»

Quintas.

Habiéndose observado que varios Ayuntamientos de esta provincia no han verificado lo prescrito por la Real orden de 16 de Febrero último, inserta en el Boletín oficial correspondiente al día 24 de dicho mes, he dispuesto, de acuerdo con la Comisión provincial, hacer las siguientes prevenciones a las Corporaciones municipales que se hallen en el mencionado caso: Que los Ayuntamientos llamen sin mas dilacion los mozos que quedaron destinados a la reserva en el reemplazo del año próximo pasado, por habér tenido entonces la talla de un metro 500 milímetros, sin alanzar la de un metro 540, y se les talle nueva-mente ante la respectiva Corporacion municipal, previa citacion de los demás responsables al referido reemplazo, con arreglo al articulo 72 de la ley de 30 de Enero de 1856.

2.º Que si alcanzasen la talla de un metro 540 milímetros, los remitán en la fecha correspondiente según la designación de

dijo, que aparece en el Boletín, del
 16 del actual, ó fin de que ingresen
 en el Caja, si resultasen útiles
 al ser tallados, y reconocidos en
 ellos pasando al servicio activo, ó
 á la situación de reclutas disponi-
 bles, según la suerte que les hu-
 biera correspondido, en el año an-
 terior, lo cual en el primer caso
 causará la baja en filas de los que
 resulten excedentes de cupo.
 Y 3.ª. Que si no llegasen á la
 estatura de un metro, 540 mil-
 ímetros, pueden los demás intere-
 sados en el reemplazo del año úl-
 timo reclamar nueva medición
 ante la Comisión provincial, en
 el tiempo y forma prevenidos por
 el art. 100 de la citada ley de 30
 de Enero de 1856; é interpuesta
 que sea la reclamación, deben
 comparecer con Comisionado los
 reclamados y reclamantes para la
 resolución que proceda.
 Orense. 19 de Abril de 1878.

El Gobernador.
BARTOLOME MOLINA.

TERCERA SECCION

*Depósito de Bandera y embarque
para Ultramar. — Coruña.*

Aprobado por Real orden fecha 1.º del actual lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capitan general de la Isla de Cuba en 15 de Enero último, por lo que se previene que los Jefes, Oficiales ó individuos de tropa de aquel Ejército que tienen señaladas cantidades en concepto de asignacion para sus familias y deudos por la Caja de este Depósito, no pueden consignarlas mas que para sus esposas, hijos, madres viudas, padres sexagenarios, hermanas huérfanas y hermanos huérfanos menores; este Depósito lo pone en conocimiento de los interesados para que al presentarse á hacer efectivas dichas asignaciones, exhiban los documentos que se manifiestan quedando caducadas todas aquellas cuyos preceptores no reúnan el grado de parentesco que se indica.

Esposa, partida de casamiento.
Hijo, id. de bautismo del per-

Septor. al. grande, 3000 m. alt.

Padre sexagenario, id. del
asignante y perceptor.

Hermana huérfana y hermano
huérfano menor... id. la de batis-
mo, del asignante y perceptor y
la del defunción de los padres, sup

15 de Abril de 1878.

- E. T. C. Comandante, Jefe, Ti-
moteo Orozco.

Tercer trimestre de 1877-78.

Real-decreto de 20 de Julio de 1877.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Número de Orden	Nombres del comprador	Finca embargada	Procedencia	Número del inventario	Término municipal en que radica	Plazos adeudados	Fecha de los vencimientos	Importe en pesetas	Boletín en que se avisó al comprador	Días en que se debe pagar el anticipo y en qué se embarga la finca
11	Manuel Valcárcel	Rústica	Estado	2.243	Verin	7°	6 Julio de 77	95	28 Febrero 77	11 Febrero 78
12	Manuel Prieto	Tres montes	Idem	1.786, 1.814 y 1.815	Pereiro y Barbadanes	14°	4 Enero de 78	133-68	24 Dbre. de id.	19 Febrero 78
13	Jacobo Salgado	Casa y otros	Idem	216 y 90	Orense	11°	10 »	190-63	Idem	Idem
14	El mismo	Molino	Idem	291	Idem	»	20 »	87-50	Idem	Idem
15	Valentin Romero	Monte	Idem	1.171	Carballino	15°	7 »	81-25	Idem	Idem
16	Pedro Gomez	Idem	Idem	1.572	Monterrey	14°	10 »	11-25	Idem	Idem
17	Camilo-Rodríguez	Dos id.	Idem	1.575 y 61	Idem	14°	»	20-36	Idem	Idem
18	Cenon Alvarez	Prado	Idem	4.636	Villardevos	8°	13 »	4	Idem	Idem
19	Tomás Cenon	Dehesa	Idem	1.716	Blancos	9° al 14°	Varias	7-50	Idem	Idem
20	Santiago Iglesias	Labradio	Idem	2.227	Verca	8°	10 Enero de 78	3-25	Idem	Idem
								631-42		

Nota. Todas las fincas que figuran en el trimestre anterior han sido devueltas á los respectivos compradores por haber satisfecho sus descubiertos. Orense 31 de Marzo de 1878. —El Jefe económico, Angel Guerra.

Subsidio. — Circular.

Próxima ya la terminacion del año económico y conforme con lo que previene el artículo 78 del Reglamento de Mayo de 1873, he acordado que por los señores Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos de esta provincia, se proceda desde luego y sin levantar mano á la formacion de las matriculas que por contribucion industrial y de comercio han de regir en el ejercicio de 1878-79, á cuyo fin deberán tener presente las reglas siguientes:

1.ª Las disposiciones que regulan la reunion de los gremios: la forma de hacer los repartos de sus cuotas, y la manera de entablar y resolver dichos gremios las reclamaciones que se hayan hecho, no han sufrido alteracion alguna. Siendo lo mismo que años anteriores, escuso repetirlas, y llamo sobre ello su atencion para que sean rigurosamente observadas.

2.ª Las nuevas matriculas serán formadas con vista de la anterior, teniendo en cuenta las alteraciones de altas ó bajas que hayan ocurrido este año.

3.ª Respecto de los recargos que deben gravar las cuotas de esta contribucion, tanto para el Tesoro como para municipales, rijen las que actualmente se hallan decretadas, sin perjuicio de lo que resuelvan las Cortes al aprobar los presupuestos que se hallan sometidos á su deliberacion.

4.ª Los impresos de las matriculas, recibos, talonarios y cuadernos de patentes es por cuenta de los Ayuntamientos.

5.ª Las mencionadas matriculas han de ser presentadas en esta Administracion el 15 de Mayo próximo, acompañadas de la copia, recibos originales y cuaderno de patentes, que examinará esta Oficina con detenimiento y subsanará los errores que pueda contener, devolviendo despues á los Alcaldes copia autorizada con los recibos confrontados y sellados con el de esta Administracion.

6.ª En lo concerniente á los cupos de encabezamiento se atenderá á lo que esta Oficina les comunique con vista de las órdenes que se reciban de la Superioridad.

Espero del celo de los señores Alcaldes que dando el mas exacto cumplimiento á cuanto se previene por esta circular, me evitarán el disgusto de aplicar con todo rigor lo ordenado en el artículo 80 del Reglamento Industrial para los efectos del 175 de la ley municipal de 20 de Agosto de 1870. Y de su recibo se servirá dar el oportuno aviso.

Orense Abril 17 de 1878. — El Jefe económico, Angel Guerra.

Negociado de Rentas Estancadas.

Resultando vacante, aunque provisto interinamente, uno de los Estancos de la villa de Viana, se hace saber á las personas que se consideren con aptitud para obtener en propiedad el referido Estanco y que pueden desde luego entablar su accion por medio de solicitud en forma que presentarán en esta Administracion económica, acompañada de la copia de su licencia absoluta los que fueren licenciados del ejército, y de la del último destino que hubieren servido los que perteneciesen á la carrera civil, precisamente dentro del improrogable término de quince dias, á contar desde el en que aparezca este anuncio en el Boletín oficial de la provincia.

Orense 17 de Abril de 1878. — Angel Guerra.

Comision de evaluacion y repartimiento de la Contribucion de Inmuebles del distrito municipal de esta Capital.

Esta Comision que dentro de los limites del cumplimiento de su deber busca cuantos medios alcanza para evitar vejaciones y molestias á los dueños de predios urbanos enclavados en el distrito municipal de esta Capital, y en su defecto á sus administradores ó apoderados que al formar el registro de esta clase de fincas han declarado su adquisicion, como á todos los demás poseedores que han faltado manifestamente á lo dispuesto en el art. 20 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, no presentando en la Comision la relacion jurada que en el se cita acompañada de los documentos justificativos praveidos en la Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de Diciembre de 1869; ha apurado todos los recursos de conciliacion invitándolos por repetidos atentos avisos, por la voz del peon público, por edictos y hasta por comunicaciones oficiales, á la presentacion de aquellos documentos y sin embargo, desatendiendo este leal procedimiento, obligan á la Comision á este último é improrogable llamamiento, antes de privar de su derecho en las reclamaciones de agravio á los contribuyentes que se encuentren en la regla 1.ª y 2.ª de la circular de la Direccion general de Contribuciones de 6 de Noviembre de 1852, y de hacer cumplir el precepto de la ley empleando los medios coercitivos que la misma dispone.

El art. 20 del citado Real Decreto dice: Al repartimiento de esta contribucion precederá en cada pueblo una evaluacion general de todos los bienes inmuebles y de la ganaderia, exigiendo de

los propietarios, y en su defecto de sus administradores ó apoderados, relaciones juradas de los predios rústicos y urbanos que posean ó administren en el término jurisdiccional del mismo pueblo.

El 24: El plazo para presentar las relaciones de que tratan los artículos anteriores será señalado por los Ayuntamientos (hoy comisiones de evaluacion) con presencia de las circunstancias de cada pueblo; pero sin exceder de un mes ni bajar de ocho dias. Los propietarios de fincas, censos ó ganados que en el plazo señalado no presenten las relaciones, incurrirán en la multa de la 4.ª parte de la renta de sus fincas ó de las utilidades de su granjeria, las cuales se evaluarán de oficio, pagando además los gastos de esta operacion.

Reglas 1.ª y 2.ª de la circular de 6 de Noviembre de 1852: 1.ª Ningun contribuyente tendrá derecho á reclamar de agravio por la apreciacion que la Junta pericial hubiese hecho de sus propiedades, si no hubiese presentado su relacion de riqueza ó la rectificacion de la misma en el plazo que el Ayuntamiento (la Comision de evaluacion) señale para los demás contribuyentes del pueblo. 2.ª Todo interesado para usar de este derecho durante estar expuestos al público para oír de agravios el amillaramiento de la riqueza individual contribuyente y el reparto del cupo municipal. Fuera de los plazos que al efecto indicado se señale, no se admitirá queja alguna, teniéndose por aceptados y consentidos los hechos consignados en ambos documentos.

Real orden de 10 de Diciembre de 1869. — Parte dispositiva. — En su consecuencia, el Regente del Reino se ha servido disponer que renueve V. S. á los Alcaldes de esa provincia la prescripcion citada; previniéndoles severamente bajo su responsabilidad, que no autoricen alteracion alguna de nombre en los amillaramientos de sus pueblos respectivos, sin previa presentacion de los documentos traslativos de dominio, registrados en el de la propiedad y con la nota de exencion ó de pago del impuesto hipotecario, según proceda en cada caso.

La conducta observada por los propietarios á quienes acusa la indicada falta que la Comision reconoce motivada solo de abandono en sus intereses, ó por inconsciencia única razon que puede aplicarse al presente caso porque no es posible creer que haya interesado que se exponga á sufrir las penas que la ley impone por deliberada desobediencia, y lo que es mas grave, á experimentar los perjuicios que siempre le ocasionará no legalizando el derecho de propie-

dad inscribiéndola en los registros de la Comision, hace esperar á la misma confiamamente que, conociendo las disposiciones que tratan del impuesto sobre la riqueza contributiva, se apresurarán dentro del improrogable término de 15 dias á presentar en esta oficina los documentos y justificantes que quedan citados para evitar el empleo de medidas odiosas que indudablemente han de seguir si los dueños de los predios de que se trata, persisten negándose á los conciliadores llamamientos de esta Comision.

Orense 17 de Abril de 1878. — El Presidente de la Comision, Antonio Gomez.

QUINTA SECCION.**AYUNTAMIENTOS.****Oimbra.**

Cumpliendo con lo que dispone la Administracion económica de la provincia en su circular de 31 de Enero próximo pasado, se hace saber á todos los contribuyentes por territorial, así vecinos como forasteros de este distrito, que hubiesen tenido alteraciones en su riqueza imponible y lo justifiquen con arreglo á la ley, concurren á esta Secretaria en el término de ocho dias desde que tenga lugar la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de esta provincia; advirtiéndoles que pasado dicho término sin verificarlo, no serán admitidas.

Oimbra Abril 14 de 1878. — El Alcalde, Demetrio Pazo.

ANUNCIOS.**LA BURSÁTIL****MADRID:****RELATORES, 26, PRINCIPAL DERECHA.**

Compra al contado y á los mas altos precios de Valores Públicos, de Bancos y Sociedades; de Doses y Treses; Personal; Ferro-carriles; Caja de Depósitos; Bonos del Tesoro; Cupones y Carpetas de intereses y de Inscripciones de Ayuntamientos; Requisa y del Empréstito de 175 millones; Recibos al 25; nuevas Décimos y Residuos al 28 y títulos completos al 30 por ciento.

Préstamos sobre valores al 6 por ciento anuales. La correspondencia se dirigirá al Gerente de La Bursátil y los valores en certificado, para reembolsar su importe.

En el caso de no haberse verificado el pago de los valores en el plazo de 15 dias, se procederá á la venta de los mismos en el mercado de valores.